

C

Columna



Obras públicas: una política de Estado al servicio de los territorios

Victor Herrera Werner
Seremi (s) MOP Atacama

Hablar de obras públicas no es referirse solo a cemento, asfalto o inauguraciones. Es, ante todo, hablar de cómo el Estado decide estar presente en la vida cotidiana de las personas y en el desarrollo equilibrado de los territorios. Por ello, la obra pública debe entenderse como una política de Estado sostenida en el tiempo, más allá de los ciclos electorales y de los gobiernos de turno. Cada camino rural, cada sistema de agua potable, cada obra sanitaria o de conectividad representa mucho más que infraestructura física: es igualdad de oportunidades, arraigo, desarrollo local y mejora en la calidad de vida.

En un contexto de cambio climático y crecientes desafíos sociales, la infraestructura cumple además un rol clave en la prevención, la adaptación y la protección de las personas.

En muchos territorios, la obra pública es la condición básica para que otras políticas –educativas, productivas o sanitarias– puedan desplegarse de manera efectiva. La inversión en infraestructura no solo dinamiza la economía y genera empleo, sino que también integra zonas históricamente posteriores, reduce brechas estructurales y fortalece el tejido social. Una

ruta, un puente o una obra hídrica son decisiones estratégicas cuyos impactos se extienden por décadas.

En regiones como Atacama, con una geografía diversa y altos desafíos en conectividad, recursos hídricos y resiliencia frente al cambio climático, la obra pública adquiere un valor aún más estratégico, permitiendo no solo mejorar la calidad de vida, sino también sostener el desarrollo productivo y la seguridad de las comunidades.

Pensar la obra pública como política de Estado implica planificación, continuidad, una mirada territorial y una fuerte alianza público - privada, priorizando las necesidades reales de cada comunidad y escuchando a los actores locales. En un contexto de cambio climático y crecientes desafíos sociales, la infraestructura cumple además un rol clave en la prevención, la adaptación y la protección de las personas. La eficiencia, la transparencia y la buena gestión son condiciones esenciales para que la inversión pública sea legítima y sostenible.

Cada peso invertido debe traducirse en soluciones concretas y en mayor confianza en las instituciones. En definitiva, defender la obra pública es apostar por un desarrollo con equidad, integración territorial y bienestar colectivo. Las obras públicas no son un gasto: son una inversión estratégica al servicio de los territorios y de las futuras generaciones.